

**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE  
LOS DERECHOS POLÍTICO-  
ELECTORALES DEL CIUDADANO**

**EXPEDIENTE:** SUP-JDC-1313/2019

**ACTORA:** ROSA MARÍA REYES  
NICASIO

**AUTORIDAD RESPONSABLE:**  
JUNTA DE COORDINACIÓN  
POLÍTICA DEL SENADO DE LA  
REPÚBLICA

**MAGISTRADO PONENTE:** INDALFER  
INFANTE GONZALES

**SECRETARIO:** CÉSAR AMÉRICO  
CALVARIO ENRÍQUEZ

**COLABORÓ:** OMAR ENRIQUE  
ALBERTO HINOJOSA OCHOA

**Ciudad de México, nueve de octubre de dos mil diecinueve.**

**V I S T O S**, para resolver los autos del juicio al rubro indicado, promovido por **Rosa María Reyes Nicasio**, quien se ostenta como aspirante para ocupar el cargo de Magistrada electoral local, a fin de impugnar el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que remitió a la Comisión de Justicia, ambas del Senado de la República, los expedientes de las y los candidatos a ocupar las Magistraturas de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, que cumplieron con los requisitos para ello.

## RESULTANDO

**I. Antecedentes.** De la narración de hechos que la actora expone en su demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

**1. Emisión de la Convocatoria.** El **diez de septiembre** de dos mil diecinueve, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República emitió la Convocatoria para ocupar las magistraturas electorales locales en diversas entidades federativas, entre ellas el estado de **Guanajuato**.

En dicha Convocatoria se estableció como **plazo para el registro** de aspirantes, el comprendido **del diecisiete al veinte de septiembre** del año en curso, en un horario de las ocho a las diecisiete horas (tiempo del centro de México); registro que debían realizar mediante la página electrónica del Senado de la República.

**2. Registro de aspirantes.** El **veinte de septiembre** del año en curso, la actora realizó su registro.

**3. Notificación de inconsistencias.** El mismo **veinte de septiembre** del año en curso, la Junta de Coordinación Política del Senado notificó a la accionante por correo electrónico que su registro presentaba *inconsistencias*.

**4. Acuerdo impugnado.** El **veinticinco de septiembre** de dos mil diecinueve, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República emitió el acuerdo por el que remitió a la Comisión

de Justicia los expedientes de las y los aspirantes para ocupar las Magistraturas electorales locales, que cumplieron con los requisitos para ello.

En dicho acuerdo **no se encuentra el nombre de la actora**, por lo que endereza la presente impugnación en su contra.

**II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.**

**1. Demanda.** El **uno de octubre** siguiente, la ahora actora acudió directamente a la Oficialía de Partes de la Sala Superior, para presentar escrito por el que promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de impugnar, entre otras cuestiones, el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República por el que remite a la Comisión de Justicia los expedientes de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada o Magistrado de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral.

**2. Turno y trámite.** Ese **mismo día**, el Magistrado Presidente de la Sala Superior ordenó integrar el expediente identificado con la clave SUP-JDC-**1313/2019**, y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Indalfer Infante Gonzales, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De igual forma, **ordenó a la autoridad responsable realizar el trámite** del juicio, previsto en los artículos 17 y 18 de la invocada Ley adjetiva federal.

**3. Sustanciación.** En su oportunidad, el Magistrado instructor acordó la **radicación** del presente juicio ciudadano; **admitió** a trámite la demanda y, al estar debidamente integrado el expediente, declaró **cerrada la instrucción**, quedando en estado de dictar sentencia.

## **C O N S I D E R A N D O**

### **PRIMERO. Competencia.**

La Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, en términos de los artículos 35, fracción II; 41, párrafo segundo, Base VI; y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c); y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 79; 80, párrafo 1, inciso f); y 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la actora controvierte un acto relacionado con el procedimiento para la designación de Magistradas y Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, lo cual pudiera incidir en su derecho político-electoral a la integración de la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad federativa por la que pretende participar.

Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado en la jurisprudencia **3/2009**, de este órgano jurisdiccional, de rubro: *“COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA*

*FEDERACIÓN CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.”<sup>1</sup>*

**SEGUNDO. Procedencia del medio de impugnación.**

El juicio ciudadano reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8; 9; párrafo 1; 10; 79 y 83, párrafo 1, inciso a), todos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se explica:

**a) Forma.** La demanda se presentó por escrito y en ellas se: **1)** precisa el nombre de la actora; **2)** señala domicilio para oír y recibir notificaciones; **3)** identifica el acto impugnado; **4)** menciona a la autoridad responsable; **5)** narra los hechos que sustentan su inconformidad; **6)** expresa conceptos de agravio; **7)** ofrece pruebas; y **8)** asienta su nombre, firma autógrafa y calidad jurídica.

**b) Oportunidad.** El presente juicio fue promovido dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8, párrafo 1, de la invocada Ley de Medios ya que, si bien el acto impugnado fue emitido el **veinticinco de septiembre** del año en curso, no existe constancia en el expediente con la que se pueda acreditar la fecha de su publicación, ni la responsable hizo manifestación alguna al respecto al rendir su informe circunstanciado, por lo que en una perspectiva favorable a la promovente, se debe

---

<sup>1</sup> Compilación 1997-2018, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 238 a 240.

considerar que la demanda fue presentada en forma oportuna, a partir de la fecha de su presentación.

Lo anterior, con apoyo en el criterio contenido en la Jurisprudencia **8/2001**, de esta Sala Superior, de rubro: *“CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN CONTRARIO.”*

En el caso, el escrito de demanda se presentó ante la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el **uno de octubre** del presente año, por lo que su promoción se considera **oportuna**.

**c) Legitimación.** Se satisface este requisito, pues el medio de impugnación se promueve por una ciudadana que se ostenta como aspirante para ocupar el cargo de Magistrada dentro del órgano jurisdiccional en materia electoral correspondiente al estado de **Guanajuato**, en tanto controvierte actos de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que considera afectan su derecho a integrar una autoridad jurisdiccional electoral local.

En este sentido, la actora se duele de haber sido excluida por la Junta de Coordinación Política responsable, del listado de aspirantes que cumplieron con los requisitos previstos en la Convocatoria atinente.

**d) Interés jurídico.** En el caso, **la autoridad responsable plantea la improcedencia** del presente juicio ciudadano, atento que, a su juicio, **no existe una afectación al interés jurídico** o legítimo de la promovente.

Se **desestima** la causal invocada por la Junta de Coordinación Política, en atención a lo siguiente:

Ha sido criterio de esta Sala Superior que el interés jurídico existe cuando en la demanda se alega una vulneración a algún derecho sustancial del promovente, a la vez que se invoca la intervención del órgano jurisdiccional competente como necesaria y útil para lograr la reparación de esa violación; ello, a partir de la formulación de un planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia que tenga el efecto de revocar o modificar el acto impugnado, lo cual debe producir la restitución al demandante en el goce de los derechos político-electorales presuntamente vulnerados.

Lo antedicho se encuentra recogido en la Jurisprudencia **7/2002**, de rubro: *“INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.”*

En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que la accionante acusa una afectación a su derecho político-electoral de integración de autoridades jurisdiccionales en la materia, por lo cual acude a esta instancia jurisdiccional para que se repare la supuesta afectación provocada.

Es por ello que, si la promovente controvierte el Acuerdo por el que la Junta de Coordinación Política remitió a la Comisión de Justicia, ambas del Senado de la República, los expedientes de las y los aspirantes para ocupar las Magistraturas electorales locales, por considerar que fue indebidamente excluida del

procedimiento de selección de dichos cargos jurisdiccionales, **resulta evidente que cuenta con interés para promover** el presente medio de impugnación, atento que exigirle un acreditamiento adicional implicaría un obstáculo de acceso a la justicia, por ser precisamente esa exclusión lo que a criterio de la actora le impide hacer posible el derecho en comento.

Consecuentemente, se debe reconocer que la accionante **tiene interés jurídico** para promover el presente medio de impugnación.

**e) Definitividad.** Se cumple con este requisito, toda vez que no está previsto un medio de defensa diverso por el que pudiera ser revocado, anulado o modificado el acto que impugna.

Al estar colmados los requisitos de procedibilidad indicados, y toda vez que la Sala Superior no advierte de oficio la existencia de alguna causa que genere la improcedencia o sobreseimiento del juicio ciudadano en que se actúa, lo conducente es analizar y resolver el fondo de la *litis* planteada.

### **TERCERO. Actos impugnados.**

A fin de dar claridad al sentido que regirá el presente fallo, y a partir de la revisión a las constancias que integran el expediente que se resuelve, esta Sala Superior advierte que **las inconsistencias detectadas** y notificadas por la autoridad responsable a la actora, fueron las siguientes:

- *No usó formato de Currículum Vitae*
- *Falta testar (Acta de nacimiento; título profesional; cédula profesional)*



*- Presentó credencial de elector en copia simple, no certificada*

*- No puso nombre en su ensayo*

Al respecto, la actora se inconforma con el acuerdo de veinticinco de septiembre de esta anualidad, emitido por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, por el que remitió a la Comisión de Justicia los expedientes de las y los aspirantes para ocupar las Magistraturas electorales locales que cumplieron con los requisitos para ello, planteando motivos de inconformidad relacionados con las temáticas siguientes:

- i. Falta de fundamentación y motivación del Acuerdo impugnado, así como de la constancia emitida por la Comisión de Justicia.
- ii. Inconstitucionalidad del requisito de presentar documentos en versión pública (Base Sexta de la Convocatoria); y
- iii. i. Falta de oportunidad para subsanar inconsistencias.

**CUARTO. Estudio de fondo.**

La Sala Superior analizará los conceptos de agravio en orden distinto al señalado en el escrito de demanda de la actora, a fin de abordar cada uno de los temas antes precisados, sin que ello le cause perjuicio, dado que lo importante es que todos los motivos de disenso sean examinados.

Lo anterior, de conformidad al criterio sostenido por este Tribunal Constitucional en Materia Electoral en la jurisprudencia

**4/2000**, de rubro: “*AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.*”<sup>2</sup>

Así, este órgano jurisdiccional considera que los motivos de disenso planteados por la accionante **deben desestimarse**, de conformidad con los motivos, razones y fundamentos que se exponen a continuación.

**i. Falta de oportunidad para subsanar inconsistencias.**

La accionante sostiene que el plazo que se le otorgó para subsanar las supuestas inconsistencias carece de razonabilidad, puesto que la responsable le notificó las mismas a las veintitrés horas con veinte minutos (23:20) del veinte de septiembre de dos mil diecinueve, mientras que el sistema implementado para registrarse y subsanar las inconsistencias advertidas no permitió el ingreso después de las diecisiete horas (17:00) de ese día, situación que tornó imposible subsanarlas, dejándoles en total estado de indefensión.

Afirma que no le fue posible subsanar las inconsistencias, ya que no es experta en manejar programas especializados de edición de documentación, por lo que le fue materialmente imposible cumplir con las exigencias establecidas en la Convocatoria, respecto a los requisitos de los documentos que se debían presentar en su versión pública.

Para demostrar su dicho, solicita a esta Sala Superior que se requiera a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República información relacionada con el sistema por el que se

---

<sup>2</sup> Ídem, página 128.

registraron los aspirantes al cargo de Magistrados electorales locales a fin de evidenciar que, a la gran mayoría de las aspirantes que fueron excluidas no les fue posible subsanar las inconsistencias requeridas.

Los planteamientos previamente sintetizados son **infundados**.

En términos de lo previsto en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las Constituciones y Leyes locales en materia electoral se debe garantizar, entre otros aspectos, que las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias en materia electoral gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Sobre el particular, se prevé que las autoridades jurisdiccionales electorales locales se integren por un número impar de Magistrados, cuyo nombramiento corresponde al Pleno del Senado de la República, mediante el voto de al menos las dos terceras partes de las y los senadores presentes, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley.

Por otra parte, en el artículo 105, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se prevé que las autoridades electorales jurisdiccionales locales, son los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad federativa, los cuales deben gozar de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, y deben cumplir sus funciones bajo los

principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.

Asimismo, en el párrafo 2 del propio precepto legal, se dispone que tales órganos jurisdiccionales **no deben estar adscritos a los Poderes Judiciales** de las entidades federativas.

Por cuanto hace a su integración, en el artículo 106, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se precisa que los órganos jurisdiccionales electorales de las entidades federativas deben funcionar en forma colegiada y estar conformados por tres o cinco magistrados, de conformidad con lo que se establezca en la respectiva Constitución local; asimismo, se establece que la renovación de sus integrantes, que determine el Senado de la República, se llevará a cabo en forma escalonada.

Es de destacar que, en términos de lo previsto en el artículo 117, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las y los Magistrados electorales de las entidades federativas gozan de todas las garantías judiciales previstas en el artículo 17 de la Constitución Federal, a efecto de garantizar su independencia y autonomía, cuyo contenido mínimo se integra por la permanencia y la estabilidad en el ejercicio del cargo por el tiempo de su duración.

En cuanto al procedimiento para la designación de las y los Magistrados de los Tribunales Electorales de las entidades federativas, en el artículo 108 de la mencionada Ley general se establece que la Cámara de Senadores emitirá, a propuesta de

su Junta de Coordinación Política, la convocatoria pública que contendrá los plazos y la descripción del procedimiento respectivo.

Por lo que se refiere a los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado o Magistrada de órgano jurisdiccional electoral de alguna entidad federativa, en el artículo 115 de la Ley de referencia, se señalan los siguientes:

- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.
- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.
- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
- Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, durante un año anterior al día de la designación.
- No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernador, secretario, procurador, senador, diputado federal o

local, durante los cuatro años previos al día de su nombramiento.

- Contar con credencial para votar con fotografía.
- Acreditar conocimientos en derecho electoral.
- No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político.
- No haber sido registrado como candidato, con excepción de los candidatos independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos anteriores a la designación
- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación.

Como se advierte, el Constituyente y el legislador ordinario delegaron a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión **el establecimiento del procedimiento** que debe seguirse para la designación de los ciudadanos que habrán de desempeñar los cargos mencionados, **así como las reglas** que los interesados deberán de observar para la satisfacción de los requisitos mencionados.

En ese sentido, la atribución de la Cámara de Senadores para la designación de los ciudadanos que habrán de desempeñar las Magistraturas Electorales en las entidades federativas, no

se circunscribe a la determinación de los aspectos procedimentales a que deben sujetarse los ciudadanos interesados en ser designados para el desempeño de esos cargos, sino que implica también la determinación de las documentales y sus características que deben cumplir para tener por satisfechos los requisitos atinentes.

Así, conforme a las normas antes mencionadas, la facultad reservada al señalado órgano parlamentario implica la posibilidad de requerir la documentación que los interesados deberán presentar para acreditar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para poder ser designados a esos cargos, así como para establecer los plazos, modos, formas y condiciones en que habrá de presentarse la documentación de referencia.

En ese orden de ideas, conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 108, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Senado de la República **cuenta con la facultad exclusiva** de establecer, en la convocatoria atinente, tanto el método, como los aspectos formales e instrumentales necesarios para desahogar el procedimiento correspondiente a la designación de las personas que habrán de ejercer el cargo de Magistrados integrantes de los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas.

Ello es así, toda vez que se trata de un procedimiento que tiene por finalidad cumplir con una facultad de ese órgano

parlamentario, y no de desahogar algún procedimiento de elección en el que deban observar reglas o condiciones preestablecidas por el Constituyente o el legislador ordinario; sin embargo, el ejercicio de esa facultad se encuentra sujeto a otorgar a todos los interesados condiciones mínimas de igualdad para ser tomados en cuenta en la designación atinente, a partir de **exigencias instrumentales y operativas** que resulten proporcionales a la finalidad perseguida, que es la integración de esos órganos jurisdiccionales con personas que cumplan con los requisitos constitucionales y legales, y que resulten idóneas para el desempeño de la función.

Atento a ello, la determinación e instauración de un procedimiento para la designación de funcionarios judiciales locales en materia electoral no implica, por sí mismo, un acto de autoridad que prive o limite algún derecho de los gobernados a ejercer las funciones públicas de su país, siempre y cuando garantice las mismas oportunidades y condiciones para todos los participantes.

Lo anterior, en virtud de los actos de esos procedimientos no se identifican ni guardan relación con aquellos que se emiten por las autoridades y poderes públicos, relacionados con el ejercicio de derechos que sólo requieren de la expresión de la voluntad del gobernado para vincular a las autoridades correspondientes a su observancia, sino que se está en presencia de un procedimiento en el que **el derecho se satisface con otorgar un trato igualitario a todos los aspirantes** a ser tomados en consideración, lo que se cumple cuando las reglas para su



desahogo rigen por igual para todos los contendientes, y éstas son acordes al parámetro de regularidad constitucional.

Ello es así, porque el derecho ciudadano a ser designado para desempeñar las funciones públicas del país, previsto en los artículos 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, párrafo primero, inciso c), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,<sup>3</sup> y 23, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,<sup>4</sup> tiene como elemento o núcleo esencial, garantizar a los ciudadanos las condiciones mínimas de igualdad para poder ser tomado en cuenta en la designación de la persona que habrá de desempeñar la función, en el entendido que aquellas que requieran de conocimiento, experiencia y habilidades especiales, deberán estar reguladas en la Constitución y la Ley.

Así, el alcance de ese derecho no implica la obligación de la autoridad de considerar en la designación a todos los que expresen su deseo de participar en la misma, por ese simple hecho, pues la exigencia esencial para el desempeño de funciones públicas, tratándose de cargos en los que se requiere de conocimientos o habilidades técnicas, como lo es la función jurisdiccional electoral, es la de demostrar, de manera oportuna

---

<sup>3</sup> “**Artículo 25.** Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

...

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

<sup>4</sup> “**Artículo 23.-** Derechos Políticos

...

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

y conforme a las reglas correspondientes, que el o la interesada cuenta con los conocimientos para el desempeño de esa actividad.

En el caso, debe establecerse que el órgano legislativo responsable emitió una Convocatoria pública, en la que estableció el procedimiento, plazos, modos y condiciones a que debían sujetarse las y los interesados, para demostrar la satisfacción de los requisitos constitucionales y legales y, con ello, poder ser tomados en consideración en la designación de los Magistrados locales en materia electoral, señalando el plazo y manera específica en que debían presentar la documentación en los términos que, en lo que interesa, son al tenor literal siguiente:

*“**SEGUNDA.** Para acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta de Coordinación Política recibirá las solicitudes de los interesados a participar en el proceso de selección que estimen reunir los requisitos constitucionales y legales, **a través del mecanismo electrónico de registro** que se encontrará disponible desde la página web del Senado de la República en [www.senado.gob.mx](http://www.senado.gob.mx) **a partir del día 17 de septiembre de 2019 y hasta el día 20 de septiembre de 2019 del presente, en un horario de las 8:00 horas a las 17:00 horas (Tiempo del Centro de México),** siendo tal mecanismo el **único medio reconocido** por el Senado de la República para tal efecto.*

[...]

***SEXTA.** La persona aspirante a ocupar el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral que se someta al procedimiento de designación al que se refiere esta convocatoria, deberá, siguiendo las instrucciones correspondientes, iniciar, seguir y, en su caso, concluir el registro electrónico necesario al que se refiere la presente convocatoria, debiendo cumplir con los requisitos exigidos.*

*Para su registro, la persona aspirante deberá seguir el siguiente procedimiento electrónico:*

[...]

*k) La Junta de Coordinación Política podrá validar el registro hasta 36 horas después de acusada la recepción de su documentación, por los mismos medios establecidos en el inciso e) de la presente Base.*

*En el caso de que la Junta de Coordinación Política realice la validación de los documentos **dentro de los días y horarios que estará abierto el registro** señalado en la Base SEGUNDA de esta Convocatoria, **los aspirantes podrán subsanar las inconsistencias** que pueda presentar su documentación **hasta el 20 de septiembre del año en curso, a las 17:00 horas** (Tiempo del Centro de México).”*

**(Énfasis agregado por esta Sala Superior)**

De las previsiones de referencia, se advierte que, entre las reglas del procedimiento para la designación de las personas que ocuparán las Magistraturas de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, se encuentran las siguientes:

- El **registro** de los aspirantes se llevaría a cabo **a través del sistema informático** previsto para ese efecto.
- La **única vía** para la presentación de la documentación de los aspirantes **era a través del sistema** referido.
- El **plazo** para la presentación de la solicitud y demás documentación de los aspirantes transcurrió **del diecisiete al veinte de septiembre de dos mil diecinueve**, en el horario comprendido **entre las ocho y las diecisiete horas** (tiempo del centro de México).

- La Junta de Coordinación Política del Senado de la República era el órgano competente para verificar si los aspirantes cumplieron o no con los requisitos para participar en el procedimiento de selección de referencia.
- La verificación de la solicitud y demás documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes, **debía llevarse a cabo dentro de un plazo máximo de treinta y seis horas**, contadas a partir de su recepción.
- En el caso de que, **dentro del periodo de registro**, la Junta de Coordinación Política resolviera sobre la validación de los registros en los que advirtiera la existencia de inconsistencias, **los aspirantes podían subsanarlas** antes del término del periodo señalado.

Como se advierte de lo expuesto, el contenido normativo de las disposiciones de referencia se identifica con las reglas para el desahogo del procedimiento de selección mencionado, es decir, se trata de las previsiones de naturaleza instrumental para que el órgano legislativo esté en aptitud de designar, de manera oportuna, a las personas que ejercerán los cargos mencionados.

Ahora bien, de la revisión a la Convocatoria atinente, se advierte que se dirigió a las personas interesadas en cubrir las vacantes mencionadas, y a la ciudadanía en general, con el fin de hacer saber, entre otras cuestiones, las reglas a las que se sujetarían las designaciones de las personas que ocuparían los cargos de referencia, **las cuales resultaban aplicables por**

**igual**, a todos los sujetos interesados en participar en el procedimiento de designación.

De las constancias de autos, también se verifica que dicha Convocatoria **se publicó durante tres días consecutivos**, en al menos cuatro medios: dos periódicos de circulación nacional, en la Gaceta del Senado de la República, en la página oficial del Senado de la República, y en el micrositio de la Comisión de Justicia de la referida Cámara parlamentaria. Tal forma de proceder corrobora la intención de que la Convocatoria fuera conocida por la ciudadanía en general.

Ahora, la publicación de la Convocatoria en los términos indicados produjo distintos efectos jurídicos, como el relativo a que los interesados en participar por alguno de los cargos aludidos se sujetaran, en igualdad de términos y sin distinción alguna, a las reglas ahí previstas y a las demás normas que resultaran aplicables.

Esto es, la publicación de la Convocatoria tuvo, entre otros propósitos, dar a conocer a la ciudadanía que se celebraría un procedimiento para la designación de las personas que ocuparán las Magistraturas de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, y hacer saber las reglas a las que debían sujetarse quienes se interesaran por participar por alguno de los cargos para los que se convocó, en el entendido que todos los participantes se encontrarían sujetos a las mismas reglas, sin distinción alguna.

Conforme a lo descrito, si en el caso la actora plantea que la autoridad responsable no le otorgó la posibilidad de subsanar las inconsistencias en que incurrió en la presentación de la documentación requerida, dicho planteamiento resulta **infundado**, ya que al tratarse de un procedimiento de designación en el que el órgano legislativo contaba con la atribución de establecer las reglas a las que se sujetarían los interesados en participar en el mismo, **no le era exigible** establecer un mecanismo u oportunidad que permitiera a los interesados corregir las irregularidades u omisiones en que incurrieron para acreditar la satisfacción de los requisitos constitucionales y legales para el desempeño del cargo, ya que la autoridad **sólo se encontraba vinculada a cumplir con el procedimiento que ella misma determinó en la Convocatoria** correspondiente, y a aplicarlo, sin distinción alguna, a todos los aspirantes.

Ahora bien, el hecho de que la autoridad legislativa haya previsto en la Convocatoria para la designación de Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, la posibilidad de que los interesados subsanaran los errores y omisiones en sus solicitudes de registro y demás documentación, cuando la revisión concluyera dentro del periodo previsto para la presentación de la documentación correspondiente, **no implicaba la obligación para otorgar una segunda oportunidad** para cumplir con los requisitos necesarios para que un ciudadano continuara dentro del procedimiento de referencia, ni tampoco un trato inequitativo a los interesados.

Ello es así en virtud de que, tal y como se señaló, en los procedimientos de designación de Magistrados realizados en ejercicio de sus atribuciones, la autoridad competente cuenta con la facultad de definir el procedimiento correspondiente, **sin que ello le vincule a prever supuestos para subsanar inconsistencias o irregularidades**; además de que tampoco le faculta a establecer mecanismos que permitan otorgar tratos diferenciados entre los contendientes.

En efecto, el procedimiento bajo estudio tiene como finalidad designar a Magistrados que habrán de formar parte de órganos jurisdiccionales locales, sin que alguien tenga un derecho previo, reconocido por la ley o por cualquier otra circunstancia; por tanto, en el evento de no ser elegidos tampoco se genera un acto de privación; de ahí que no es imperativo otorgarles la posibilidad de subsanar las inconsistencias en que incurrieran al registrarse.

En ese orden, la aplicación de reglas de modo, plazos, y condiciones para la acreditación de los requisitos constitucionales y legales, por parte de los interesados para la designación de las personas que habrán de desempeñar las Magistraturas locales en materia electoral, en manera alguna implica un acto que les prive de algún derecho o les limite injustificadamente la posibilidad de acceder a la función pública de impartir justicia, **máxime cuando todos los contendientes se encontraron sujetos a las mismas reglas, condiciones y oportunidades.**

En el caso, aun y cuando el órgano parlamentario no estaba obligado a ello, estableció la posibilidad de que los aspirantes subsanaran las inconsistencias, omisiones o irregularidades en que incurrieran en la presentación de su solicitud y demás documentación para participar en el procedimiento de designación de autoridades jurisdiccionales; sin embargo, **la acotó a que éstas se corrigieran o rectificaran dentro del plazo de cuatro días previsto para el registro de aspirantes y entrega de documentación.** Dicha regla rigió para todos los aspirantes.

Ahora bien, debe mencionarse que en la propia Convocatoria se estableció que el plazo con que contaba la autoridad para la revisión documental de las solicitudes de los aspirantes era de treinta y seis horas.

Lo anterior permite advertir que, todas aquellas solicitudes presentadas dentro de los dos primeros días del periodo de registro, así como las presentadas durante el tercer día, pero antes de las treinta y seis horas previas a la conclusión del registro, serían revisadas y, en su caso, declaradas con inconsistencias, con antelación a la conclusión del periodo de registro.

En este supuesto, el o la aspirante se encontraba en aptitud de subsanar las inconsistencias atinentes, siempre y cuando ello aconteciera dentro del plazo antes mencionado, lo que encuentra justificación en el trato igualitario que la responsable estaba obligada a otorgar a todas las personas interesadas en



ser tomadas en consideración para ocupar las Magistraturas vacantes.

De ahí que el otorgamiento de un plazo adicional al periodo de registro, para aquellos interesados que incumplieron oportunamente con los requisitos establecidos en la Constitución, la Ley y la Convocatoria de mérito, **hubiera implicado otorgarles un trato diferenciado**, al concederles una segunda oportunidad para satisfacer las exigencias necesarias para ser considerado en la designación, con relación a aquellos que sí lo hicieron de manera oportuna.

Al respecto, debe tenerse en consideración que todos los aspirantes se encontraron en las mismas condiciones, pues la Convocatoria se difundió con suficiente anticipación para que todos pudieran presentar oportunamente la documentación necesaria para la obtención de su registro y también para que subsanaran las inconsistencias, omisiones o irregularidades dentro del plazo señalado en la propia Convocatoria.

De esta manera, si la actora conocía los plazos y condiciones para la presentación, revisión y corrección de inconsistencias e irregularidades, y aun así no presentó su solicitud y demás documentación con la oportunidad suficiente para que, de ser el caso, las subsanara antes de la conclusión del periodo de registro, resulta evidente que **no existe base jurídica para otorgarle una segunda oportunidad para obtener su registro**; máxime, cuando todos los aspirantes se encontraron sujetos a las mismas reglas.

Sentado lo anterior, debe decirse que, de las constancias que integran el expediente, y como lo reconoce la promovente en su escrito impugnativo, la solicitud y demás documentación para ser tomada en consideración en el procedimiento de designación de Magistraturas locales en materia electoral, la presentó hasta el **veinte de septiembre** de la presente anualidad, esto es, el último día de los señalados en la Convocatoria de referencia, de tal manera que con su actuar impidió que la autoridad estuviera en posibilidad de informarle las inconsistencias y omisiones en su documentación dentro del periodo de registro y, en consecuencia, que contara con la oportunidad de subsanarlas oportunamente, para poder continuar dentro del procedimiento.

Por ello, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que no le asiste razón a la accionante cuando afirma que la autoridad responsable le privó indebidamente del derecho de acceder a la lista de ciudadanos que cumplieron con los requisitos para continuar participando en el procedimiento de designación de Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, toda vez que no se respetó su posibilidad de subsanar las inconsistencias en su registro, prevista en la propia Convocatoria ya que, como se apuntó, **no se trata de un derecho que deba ser garantizado en un procedimiento como el que se analiza**, por tratarse del ejercicio de facultades constitucionales del Senado de la República.

**ii. Falta de fundamentación y motivación del Acuerdo impugnado, así como de la constancia emitida por la Comisión de Justicia.**

Afirma la actora que el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que remite a la Comisión de Justicia, ambas del Senado de la República, los expedientes de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada o Magistrado de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, **carece de una debida fundamentación y motivación** puesto que omite citar los preceptos legales que le autorizan desestimar su solicitud de registro como aspirante a Magistrada electoral local, no obstante que cumplió con los requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley.

Asimismo, refiere que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República **dejó de señalar las razones** por las que no validó la documentación que proporcionaron al momento de realizar su registro.

Los motivos de disenso antes sintetizados devienen **infundados**.

En efecto, contrario a lo que afirma la promovente, el acuerdo impugnado sí se encuentra debidamente fundado y motivado, desde una apreciación integral del conjunto de **actos complejos y concatenados** del procedimiento que, en términos de la Convocatoria se prevé.

En efecto, una de las bases para entender debidamente fundado y motivado un acto de autoridad es que, en el cuerpo de la determinación, consten los preceptos legales y razones en que se apoye la autoridad para emitirla.

En este sentido, el principio o regla general es que la fundamentación y motivación consten en el documento y no en uno distinto; sin embargo, dicho principio tiene una excepción cuando se trata de **actos vinculados y complejos**, compuestos de diversas etapas, toda vez que, en tal hipótesis, los requisitos constitucionales de cuenta se deben tener por satisfechos cuando los mismos se encuentran **en los actos que conforman cada una de las etapas**.

Luego, si en esa cadena de actos concatenados se desprende con toda claridad que los anteriores contienen los fundamentos y motivos que la responsable ha tomado en consideración para emitir los subsecuentes, no se requiere que en los últimos se tengan que repetir nuevamente todos los fundamentos y las causas especiales o motivos particulares en que se apoyan los actos.

Así, como lo ha determinado esta Sala Superior mediante la construcción de una doctrina judicial que puede observarse, entre otros, de los juicios ciudadanos SUP-JDC-**35**/2018 y Acumulados; SUP-JDC-**1147**/2017; SUP-JDC-**315**/2017; SUP-JDC-**2427**/2014 y Acumulados; SUP-JDC-**2381**/2014 y Acumulados; y SUP-JDC-**3250**/2012, la fundamentación y motivación respecto de actos complejos que conforman un procedimiento de distintas etapas, **se satisface cuando dichos**

**principios quedan justificados en los actos de cada etapa** pues, en todo caso, el cumplimiento del principio de legalidad en tal hipótesis debe ser evaluado desde una perspectiva integral del procedimiento correspondiente.

En efecto, cuando un procedimiento se encuentra constituido por una serie concatenada de actos, si en el inicial o previo a los subsecuentes, se señalan **la fundamentación y motivación** que se ha tomado en consideración para emitirlos, no se requiere que en los actos que constituyen su consecuencia legal se tengan que repetir nuevamente todos los fundamentos y motivos que sustentan el acto respectivo.

En el caso concreto, en la Convocatoria se establece que el procedimiento de designación de Magistraturas electorales locales se conforma de la siguiente manera:

**1. Recepción de solicitudes de registro.** Será a través del mecanismo electrónico de registro disponible en la página del Senado, adjuntando la documentación requerida, entre el **diecisiete y el veinte de septiembre**, en un horario de 8:00 a las 17:00 horas. Éste será el único mecanismo reconocido por el Senado.

**2. Validación de registro.** La Junta de Coordinación podrá validar el registro hasta treinta y seis horas después de acusada la recepción de la documentación.

**3. Aprobación de formato y metodología para evaluación de candidatos.** A más tardar el treinta de septiembre, la Junta de Coordinación aprobará el formato y metodología.

**4. Comparecencias.** La Comisión de Justicia del Senado llevará a cabo las comparecencias para el análisis de las candidaturas y presentará *–a más tardar el catorce de octubre–* el listado de las candidaturas que cumplen los requisitos de elegibilidad a la Junta de Coordinación.

**5. Aprobación de listado de candidaturas elegibles.** La Junta de Coordinación propondrá mediante acuerdo al Pleno de la Cámara de Senadores, la lista de las candidaturas que son elegibles para cubrir las vacantes.

Como se advierte, el procedimiento de designación de magistraturas electorales locales **es un acto complejo formado por distintas etapas.**

Al respecto, de manera específica en la Convocatoria se señala que, una vez agotada la etapa de recepción de documentación presentada por los aspirantes, la Junta de Coordinación Política **verificará** que la información recibida acredite los requisitos y remitirá, dentro de los cinco días siguientes, a la Comisión de Justicia del Senado de la República, **aquellos que sean validados.**

En ese sentido la actora señala que, en el Acuerdo impugnado, mediante el cual la Junta de Coordinación Política remite a la Comisión de Justicia, no se exponen las razones por las cuales se determinó excluirla del listado de candidatas y candidatos que habrán de continuar en el procedimiento de designación.

Esta Sala Superior considera que no le asiste razón porque, en primer lugar, en el Acuerdo impugnado se indican las

disposiciones jurídicas que facultan a la Junta de Coordinación Política para tomar la determinación que contiene, esto es, los artículos 106, párrafo 2; 108 párrafo 1; y 115, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 80 y 82, párrafo 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 255, párrafo 2, del Reglamento del Senado de la República.

Además, en los diversos considerandos del Acuerdo impugnado, se estableció lo siguiente:

**I.** Que con base en la fracción IV, inciso c), párrafo 5o. del artículo 116 de la Constitución Federal, la elección de las autoridades electorales jurisdiccionales sería por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública.

**II.** Que, de conformidad con el artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades federativas se compondrán de tres o cinco Magistrados, que actuarán en forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años, de conformidad con lo que establezca la Constitución de cada estado o el Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México y que los Magistrados electorales serán electos en forma escalonada por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

**III.** Que la Cámara de Senadores emitirá, a propuesta de su Junta de Coordinación Política, la convocatoria pública que

contendrá los plazos y la descripción del procedimiento respectivo conforme al artículo 108, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

**IV.** Que en el artículo 115 de la misma Ley se establecen los requisitos para ocupar una Magistratura electoral local.

**V.** Que, en apego a lo señalado en la Base SEGUNDA de la mencionada Convocatoria, el mecanismo electrónico de registro se encontró disponible desde la página web del Senado de la Republica en [www.senado.gob.mx](http://www.senado.gob.mx) a partir del diecisiete de septiembre y hasta el veinte, en un horario de las ocho a las diecisiete horas.

**VI.** Que el veinte de septiembre a las diecisiete horas se venció el plazo para la recepción de la documentación parte de los aspirantes a ocupar el cargo de Magistrada o Magistrado electoral, habiéndose recibido 431 solicitudes, de las cuales 197 no cumplieron con los requisitos señalados por la Convocatoria, por lo que de acuerdo con la Base QUINTA de la misma se consideraron solicitudes no presentadas y 234 personas sí los cumplieron, por lo que, de conformidad con la Base SÉPTIMA de la Convocatoria, se remitirían a la Comisión de Justicia.

Con base en lo anterior, es claro que el acuerdo impugnado contenía las razones y disposiciones legales aplicables para ordenar la remisión de expedientes de las personas que habían cumplido los requisitos establecidos en la Convocatoria.

Además, la actora pierde de vista que dicho listado es resultado de la etapa previa a su emisión, consistente en la validación de



su registro; es decir, la revisión que realizó la Junta de Coordinación Política, de que los postulantes hubieran presentado la documentación comprobatoria especificada en la Convocatoria, en la forma y términos en que ahí se precisó.

Al respecto, la propia actora señala en los antecedentes de su demanda que dentro del plazo previsto en la Convocatoria se registró en la plataforma, anexando la documentación correspondiente, y mediante correo electrónico recibido el veinte de septiembre, una vez cerrado el sistema, es decir, después de las diecisiete (17:00) horas, tiempo del centro de México, se le notificó que su registro contenía inconsistencias, precisándole las observaciones:

- *No usó formato de Currículum Vitae*
- *Falta testar (Acta de nacimiento; título profesional; cédula profesional)*
- *Presentó credencial de elector en copia simple, no certificada*
- *No puso nombre en su ensayo*

Como se advierte, en la comunicación remitida a la actora se encuentran los motivos y fundamentos en los que se basa la determinación de no incluir su nombre en el listado de candidatos cuyos expedientes serían remitidos por la Junta de Coordinación Política a la Comisión de Justicia, pues en éste se estableció que **su registro había resultado con inconsistencias** y se precisó en qué consistían, de manera que, tratándose de un acto complejo, como el procedimiento de designaciones controvertido, es válido que la fundamentación y

motivación se incluya en el acto previo, que da origen a la determinación que impugna la promovente.

Por ello, como se estableció en la base Sexta de la propia Convocatoria, ante la falta de algún documento o su presentación fuera del tiempo y/o en forma distinta a la exigida, se tendría por no presentada la solicitud y que, agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política verificaría que la información recibida acreditaba los requisitos y validados éstos, dentro de los cinco días siguientes, se remitirían los expedientes a la Comisión de Justicia.

Así, en consideración de esta Sala Superior, es **infundado** el presente agravio, tomando en cuenta que en el propio acuerdo impugnado se fundan y motivan las facultades y circunstancias conforme a las cuales se remitían los expedientes procedentes a la Comisión de Justicia.

Deviene igualmente **infundado** el planteamiento que hace la promovente, en el sentido de que la constancia emitida por el secretario técnico de la **Comisión de Justicia** del Senado de la Republica el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, **carece de toda fundamentación y motivación**, al excluirla como aspirante al cargo referido, pues no refiere ningún precepto en el que funde su actuar y decisión, ni tampoco expresa las razones por la que la excluyen del procedimiento de designación.

Ello, atento que de autos se advierte que **esa constancia fue expedida para establecer el calendario de las**

**comparecencias de los aspirantes** al cargo de Magistrados electorales locales, cuyos expedientes fueron remitidos por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, esto es, aquellos que sí cumplieron con todos los requisitos legales que fueron requeridos.

Además, dicha actuación de la citada Comisión de Justicia fue realizada con apoyo en lo dispuesto en la Base Novena de la Convocatoria al proceso de designación de Magistradas y Magistrados electorales locales que nos ocupa, cuyo contenido es el siguiente:

*“**NOVENA.** La Junta Directiva de la Comisión de Justicia acordará el formato y la metodología para la evaluación de las y los candidatos, a más tardar el 30 de septiembre de 2019. Dicha Comisión podrá solicitar en cualquier momento la presentación de la documentación original a los candidatos.”*

Así se evidencia que, adverso a lo que afirma la accionante, en el documento cuestionado **no se le excluyó** de seguir participando en el proceso que nos ocupa, sino que fue emitido por una diversa instancia, la Comisión de Justicia del Senado de la República, con motivo de la lista de aspirantes al cargo de Magistrado electoral local que cumplieron con los requisitos para ello, que le fue remitida por la Junta de Coordinación Política, para establecer el calendario de comparecencias de las y los involucrados, razón por la que esa Comisión no tenía por qué fundamentar o motivar que su nombre no estuviera en esa lista.

**iii. Inconstitucionalidad del requisito de presentar documentos en versión pública (Base Sexta de la Convocatoria).**

La actora considera que la Base Sexta de la Convocatoria resulta **inconstitucional** puesto que, a su juicio, la formalidad en la presentación de los documentos requeridos, relativos a la **presentación de documentación en su versión pública**, resulta excesiva.

Ello ya que, además de no estar prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la legislación federal o local, resulta indebido que la omisión de cumplir con las formalidades establecidas en la Convocatoria deba ser motivo para no validar su solicitud de registro.

Por otro lado, refiere que las únicas restricciones dirigidas a los ciudadanos interesados en ser designados como Magistrados electorales de las entidades federativas deberían ser las señaladas en la ley, es decir, aquellas que descansan en aspectos intrínsecos, y no así en aspectos extrínsecos de los aspirantes.

Afirma que la supuesta inconsistencia en su registro por no adjuntar debidamente la versión pública de sus documentos (**testar datos sensibles**) debería de ser imputable a la autoridad responsable.

Al respecto aduce que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública establece que la obligación de preparar documentos para ser publicados omitiendo datos que

podieran considerarse sensibles, **corresponde a las autoridades del Estado mexicano**, por lo que refiere que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República es la autoridad a quien le corresponde velar por la protección de sus datos personales, e implementar las medidas necesarias para ello, por lo que arrojar la carga de esa obligación a los aspirantes resulta injustificado y excesivo.

Señala que desde un principio aceptó el aviso de privacidad que la autoridad proporcionó; de ahí que la obligación de testar la información le corresponda a ésta.

Por último, considera indebido que se solicitaran documentos en versión pública, cuando tanto el acta de nacimiento, título y cédula profesional son instrumentos que cualquier persona puede solicitar ante entidades públicas o visualizar vía Internet.

Esta Sala Superior considera que los motivos de agravio previamente resumidos son **infundados** porque, contrariamente a lo que sostiene la actora, el requisito exigido por la Base Sexta de la Convocatoria no se contrapone con algún precepto constitucional, al no constituir un requisito que pueda considerarse distinto a los permitidos en el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque dicha exigencia forma parte del proceso de selección, que tiene como finalidad reforzar la protección de los datos personales que se deben difundir para transparentar ante la ciudadanía el procedimiento en cuestión.

Esto es, la exigencia de presentar documentación con datos personales testados tiene como finalidad garantizar el debido agotamiento de cada una de las etapas del proceso de selección, así como la protección de datos personales, permitiendo informar y dar transparencia a la ciudadanía sobre el procedimiento de designación.

En la especie, conforme al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emitió la Convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, se establecieron distintas etapas para llevar a cabo las designaciones correspondientes.

Entre ellas, está comprendida la etapa de **recepción de solicitudes de registro**, mediante el mecanismo electrónico de registro disponible en la página del Senado, adjuntando la documentación requerida, entre el diecisiete y el veinte de septiembre, en un horario de 8:00 a las 17:00 horas. Éste sería, se estableció, el único mecanismo reconocido por el Senado.

En ese sentido, en la Base Sexta, inciso h), de la Convocatoria emitida por la responsable se estableció que, a través de ese sistema, **se debían remitir los originales y versiones públicas de la documentación** que los interesados presentaran para demostrar el cumplimiento de los requisitos para participar en el procedimiento de designación atinente.

Lo anterior, porque los aspirantes autorizaban la difusión de la documentación por el simple hecho de someterse al

procedimiento de selección materia de la presente controversia, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre este último.

De este modo, se aprecia que los ciudadanos interesados en participar en el proceso de selección para ocupar Magistraturas electorales locales debían presentar, vía electrónica, copias certificadas de los originales de su documentación, así como versiones públicas, **testando los datos confidenciales**, a fin de acreditar ante la autoridad parlamentaria que cumplían con los requisitos para ocupar una Magistratura local, exigidos en el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para participar en el proceso de selección, y estar en condiciones de difundir la información de los aspirantes para transparentar ante la ciudadanía en general dicho procedimiento y el perfil de los mismos solicitantes.

En ese sentido, la necesidad de presentar versiones públicas de la documentación permite a la Junta de Coordinación Política del Senado **estar en condiciones materiales** para desplegar sus funciones de revisión de la documentación presentada, para verificar que los aspirantes cumplen con los requisitos para remitir la documentación validada a la Comisión de Justicia del Senado, **dentro de los cinco días siguientes** a que se agote la etapa de recepción de documentación, en términos de la Base Séptima de la Convocatoria.

De igual forma, tiene como finalidad que la Junta convocante cuente con las versiones públicas de la documentación de referencia para su difusión, con el objeto de que se encuentre al alcance de cualquier persona interesada en consultarla, en

ejercicio de su derecho a la información y de esa forma garantizar una protección de datos personales evitando su difusión.

Por ello, este órgano jurisdiccional estima que la Base Sexta, inciso h), no resulta contraria a las normas constitucionales y legales aplicables, porque **la exigencia de presentar la documentación** es un mecanismo que forma parte de las etapas del proceso de selección, con independencia de las particularidades que se exijan en la Convocatoria correspondiente.

Con apoyo en lo antedicho, la afirmación de la actora, respecto a que la carga de elaborar las versiones públicas correspondía al Senado de la República, **carece de base jurídica** toda vez que, como se señaló, el órgano parlamentario cuenta con la atribución de establecer los requisitos que estime pertinentes para evaluar si los interesados satisfacen los requisitos para desempeñar la función pública de impartición de justicia electoral.

Por ende, si el Senado de la República determinó imponer el señalado requisito de elaborar las versiones públicas de los documentos que presentaron para poder ser designados a las Magistraturas locales en materia electoral, lo que permitirá a ese colegiado ocuparse de la elección de Magistraturas electorales de las entidades de la República, en los plazos y términos previstos para ello, revisando el cumplimiento de los requisitos legales de los postulantes para dictaminar la procedencia de las candidaturas y ponderar los perfiles idóneos para el nombramiento respectivo, resulta evidente que **no podría considerarse que se trata de un requisito excesivo.**



En esta línea, este Tribunal Constitucional en materia electoral considera que el testado de la documentación, por parte de los aspirantes, **no implica la imposición de un requisito injustificado** que restrinja indebidamente su derecho a ejercer funciones públicas en el país.

Ello es así porque, como se apuntó previamente, la presentación de versiones públicas de documentación **forma parte del procedimiento de selección de candidatos** que debe seguir el Senado de la República, en uso de la atribución contenida en el artículo 116, fracción IV, inciso c), apartado 5, de la Constitución Federal, en relación el 115 de la Ley General Electoral, sin que esa exigencia resulte ajena al marco legal que rige para el ejercicio del derecho de ser considerado para acceder a las funciones públicas del país en condiciones de igualdad.

En efecto, en la Base Sexta, inciso h), de la Convocatoria, que debían observar los aspirantes interesados en participar en el proceso de elección de Magistraturas, se estableció lo siguiente:

*“**SEXTA.** La persona aspirante a ocupar el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral que se someta al procedimiento de designación al que se refiere esta convocatoria, deberá, **siguiendo las instrucciones correspondientes, iniciar, seguir y, en su caso, concluir el registro electrónico** necesario al que se refiere la presente convocatoria, debiendo cumplir con los requisitos exigidos.*

*Para su registro, la persona aspirante deberá seguir el siguiente procedimiento electrónico:*

*[...]*

***h)** Desde el portal confirmará, a través del mecanismo electrónico previsto para tal fin, que ha completado los*

*formularios, así como la carga de la totalidad de los documentos solicitados en la presente convocatoria, tanto en su versión original como en su versión pública.*

[...]"

(Énfasis agregado por esta Sala Superior)

Como se aprecia, esta base imponía el deber a los aspirantes interesados en participar, de ingresar en el sistema creado para el registro de aspirantes para Magistraturas electorales locales, con los **originales y versiones públicas** de la documentación que debían presentar para demostrar el cumplimiento de los requisitos para ocupar dichos cargos.

Lo anterior, leído en consonancia con lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, inciso c), apartado 5, de la Constitución Federal; y 108, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, permite concluir que el Senado de la República **puede emitir disposiciones dirigidas a verificar la idoneidad** de los aspirante a ocupar la titularidad de las Magistraturas de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, siempre que éstas no resulten excesivas.

La citada base conlleva la obligación que constreñía a los interesados en participar en el procedimiento de elección de Magistrados estatales, de **presentar versiones públicas** de la documentación con la que pretendían demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Además, la presentación de la versión pública de la documentación busca proteger los datos personales que

constan en la misma, mediante el testado de información sensible para su debida publicación, para transparentar el proceso y el perfil de los aspirantes.

Por todo ello, esta Sala Superior considera que la presentación de versiones públicas de documentación para demostrar el cumplimiento de requisito legales, guarda una vinculación con el derecho de integrar autoridades electorales, ejercido por los ciudadanos que pretenden ocupar una Magistratura electoral local, en tanto deriva del mecanismo establecido dentro del procedimiento de elección de dichos cargos jurisdiccionales, consistente en la presentación de documentación, para atender uno de los requerimientos exigidos por la Ley, con la finalidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 115 de la Ley General Electoral.

De ahí que, en concepto de esta Sala Superior, se esté en presencia de una **exigencia razonable**, porque con la entrega de la versión original y pública de documentos, para demostrar el cumplimiento de requisitos legales, se permite al órgano legislativo cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales.

Por lo expuesto, resultan **infundados** los planteamientos de la actora, ya que la exigencia bajo estudio resulta conforme con el bloque de constitucionalidad y convencionalidad trazado para la protección de datos personales y libre asociación, en relación con los plazos y términos de cada una de las etapas del proceso de selección para la ocupación de Magistraturas electorales locales.

En las relatadas condiciones, **no existen razones jurídicas para conceder la pretensión de la accionante**, de eximirle de cumplir el requisito de presentar versiones públicas de la documentación ofrecida para demostrar el cumplimiento de los requisitos para ocupar una Magistratura de algún órgano jurisdiccional local, que aduce como excesivo.

Esta conclusión no implica que el Senado de la República se encuentre exento de cumplir con las obligaciones de resguardo de datos personales que contempla la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, una vez concluido el procedimiento de selección materia de la Convocatoria para la selección de Magistrados electorales en las entidades federativas.

Sin embargo, resulta evidente que la accionante **incumplió con los requisitos necesarios para ser registrada** en el procedimiento de designación de mérito, toda vez que fue omisa en presentar las versiones públicas de la documentación exhibida, en la forma indicada por la autoridad responsable, a fin de acreditar el cumplimiento de todos los requisitos legales para ocupar una Magistratura local electoral.

Maxime que, en el caso, los interesados en participar en el proceso para designar Magistradas y Magistrados electorales locales debían suscribir con su firma autógrafa, una declaración de voluntad expresa, contenida en la Base Sexta, inciso g), último párrafo de la Convocatoria, con la siguiente redacción: *“he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar el cargo de Magistrado del órgano jurisdiccional local, así como las determinaciones que deriven de la misma”*, con lo cual queda evidenciado que la

actora conoció y aceptó el alcance de los requisitos a colmar, por lo que si no lo hizo así, ello no resulta imputable a la autoridad responsable.

En consecuencia, ante lo **infundado** de los agravios analizados, lo procedente conforme a Derecho es **confirmar** el Acuerdo impugnado, en lo que fue materia de controversia.

Por lo expuesto y fundado, se

### **R E S U E L V E**

**ÚNICO.** Se **confirma**, en lo que fue materia de controversia, el Acuerdo impugnado.

**Notifíquese;** como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, **devuélvase** las constancias atinentes y **archívese** el presente asunto como definitivamente concluido.

Así, por **unanimidad** de votos, lo resolvieron la Magistrada y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis y el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, ante la secretaria general de acuerdos, quien **autoriza** y **da fe**.

**MAGISTRADO PRESIDENTE**

**SUP-JDC-1313/2019**

**FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO**

**FELIPE DE LA MATA PIZAÑA**

**INDALFER INFANTE GONZALES**

**MAGISTRADA**

**MAGISTRADO**

**MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO**

**JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ**

**SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS**

**BERENICE GARCÍA HUANTE**